



## I

La consulta plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, “la solicitud del responsable policial al funcionario de la información médica de sus familiares cuando deban ausentarse del trabajo por encontrarse enfermo de gravedad un familiar de los que se tiene permiso de acuerdo con la Circular de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil” de 9 de julio de 2009.

Igualmente se plantea si resulta conforme a lo dispuesto en dicha Ley Orgánica que el funcionario haya de aportar, en caso de solicitud de traslado por enfermedad grave de un familiar “informe del médico que trata al enfermo donde se especifique las enfermedades que padece”.

## II

Como cuestión previa, es preciso indicar que la transmisión de la información a la que se refiere la consulta implicará una cesión de datos de carácter personal relacionados con la salud de los familiares, por cuanto el artículo 5.1 g) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 define los Datos de carácter personal relacionados con la salud como “las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo”, añadiendo que “en particular, se consideran datos relacionados con la salud de las personas los referidos a su porcentaje de discapacidad y a su información genética”.

De este modo, y sin perjuicio de lo que posteriormente se señalará en lo que respecta a los concretos datos a los que la consulta podría referirse, sería de aplicación al supuesto planteado lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, a cuyo tenor “los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente”.

Una vez sentada esa premisa, y para el supuesto de que no existiese consentimiento del familiar enfermo, deberá analizarse si existe una norma con rango de Ley que justifique y ampare la cesión de datos planteada por el supuesto sometido a informe, debiendo asimismo tener en cuenta, por una parte, que el principio de especialidad impide acudir en este supuesto a lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 y que, lógicamente, la Circular de 9 de julio de 2009 no sería por sí sola norma suficiente habilitante

de la cesión.

### III

En relación con el primero de los supuestos planteados; esto es, en caso de solicitud de permiso como consecuencia de la concurrencia de una enfermedad grave en un familiar, el artículo 48.1 a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, de Estatuto Básico del Empleado Público dispone que “las Administraciones Públicas determinarán los supuestos de concesión de permisos a los funcionarios públicos y sus requisitos, efectos y duración. En defecto de legislación aplicable los permisos y su duración serán, al menos, los siguientes (...) por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad”, añadiendo que “cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad”.

Tal y como consta en la consulta, el Secretario del Consejo de la Policía, en escrito de 25 de enero de 2011, comunicó al sindicato consultante, en respuesta a su cuestión relativa a quién debe determinar la gravedad de un determinada enfermedad que dicha valoración únicamente podrá corresponder “al médico que atiende al paciente”, por lo que la procedencia de la concesión del permiso al que se viene haciendo referencia habrá de atenerse al carácter grave de la enfermedad diagnosticada, de forma que en caso de no poderse conocer esta circunstancia no constaría al órgano de personal la concurrencia de los requisitos exigidos expresamente por la Ley para que proceda la concesión de la licencia solicitada.

Ello implicaría que la cesión del dato relativo a la gravedad de la enfermedad del familiar será imprescindible para poder obtener la licencia, sin que por su parte, el órgano de personal pueda valorar por sí mismo la gravedad de la dolencia. De este modo, la cesión planteada encontraría cobertura en lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999 en conexión con el artículo 48.1 a) de la Ley 7/2007, que impone el requisito de gravedad de la enfermedad, junto con el de parentesco o afinidad, para la valoración de la concurrencia de los requisitos previstos en el mismo”.

La consecuencia anteriormente alcanzada, no obstante, debe ser matizada en virtud del principio de proporcionalidad, regulado por el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de forma que la información que hubiera de facilitarse debería ser la mínima imprescindible para que el órgano de personal pudiera llevar a cabo una efectiva constatación del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos.

En este punto, debe tenerse en cuenta lo ya señalado por esta Agencia en informe de 21 de octubre de 2011, en que se analizaba si la información a facilitar debería incluir los datos referentes a la concreta enfermedad padecida



por el familiar o si sería suficiente y proporcional a lo requerido por la Ley la aportación de una certificación que se limite a indicar que la mencionada enfermedad tiene carácter grave. Así, en dicho informe se indicaba lo siguiente:

*“Como punto de partida debe recordarse que el derecho a la protección de datos de carácter personal constituye un derecho fundamental consagrado en el artículo 18.4 de la Constitución, que la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STS 292/2000, de 30 de noviembre) configura como un derecho fundamental autónomo del derecho a la intimidad y cuyo contenido esencial consiste en un poder de disposición de la persona sobre la información que le concierne, que se manifiesta, esencialmente, en la necesidad de que el interesado haya prestado su consentimiento al tratamiento y cesión de sus datos y en la posibilidad del mismo de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en las normas de protección de datos.*

*Señalaba asimismo dicha Sentencia respecto a la imposición de límites a ese derecho fundamental que “si la Ley es la única habilitada por la Constitución para fijar los límites a los derechos fundamentales y, en el caso presente, al derecho fundamental a la protección de datos, y esos límites no pueden ser distintos a los constitucionalmente previstos, que para el caso no son otros que los derivados de la coexistencia de este derecho fundamental con otros derechos y bienes jurídicos de rango constitucional, el apoderamiento legal que permita a un Poder Público recoger, almacenar, tratar, usar y, en su caso, ceder datos personales, sólo está justificado si responde a la protección de otros derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos. Por tanto, si aquellas operaciones con los datos personales de una persona no se realizan con estricta observancia de las normas que lo regulan, se vulnera el derecho a la protección de datos, pues se le imponen límites constitucionalmente ilegítimos, ya sea a su contenido o al ejercicio del haz de facultades que lo componen.”*

*Por otra parte, como tal derecho fundamental toda medida restrictiva del mismo exige, como asimismo señala el Tribunal Constitucional en su Sentencia 207/1996, la estricta observancia del principio de proporcionalidad. Principio de proporcionalidad que, en el marco del derecho a la protección de datos personales, se plasma en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 conforme al cual “los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.*

*Debe así recordarse que en el marco de las Administraciones Públicas la finalidad que justifica el tratamiento de datos personales es el ejercicio de la competencia legalmente atribuida al órgano responsable del*

*tratamiento, debiendo dicho tratamiento realizarse con sujeción a los límites fijados por el principio de proporcionalidad.*

*De este modo si bien el artículo 48 de Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, concede a los funcionarios públicos el derecho a un permiso en caso de enfermedad o accidente grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, lo que implica que deberá acreditarse dicha circunstancia ante la Administración, dicho precepto no autoriza al órgano de la Administración en que el funcionario presta servicios a valorar la gravedad de la enfermedad, ni a conocer otros datos de salud distintos a la mera existencia de la situación de enfermedad grave”.*

En consecuencia, y en relación con la primera de las cuestiones planteadas, debe concluirse que la emisión de una certificación por el facultativo que tratase al familiar del funcionario solicitante en que aquél se limitase a poner de manifiesto el carácter grave de la enfermedad padecida, que justifica la solicitud del permiso al que se refiere esta primera parte de la consulta, sería conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, sin que dicha certificación pueda referirse a la concreta enfermedad padecida, dado que en ese caso resultaría violentado el principio de proporcionalidad consagrado por el artículo 4.1 de dicha Ley Orgánica. Del mismo modo, el órgano de personal no podría solicitar información adicional a la contenida en la certificación.

#### IV

En cuanto al segundo de los supuestos planteados, el artículo 20.1 h) de la Ley 30/1984, en la redacción dada al mismo por el artículo 50 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, dentro de las normas referidas a la provisión de puestos de trabajo, dispone que “la Administración General del Estado podrá adscribir a los funcionarios a puestos de trabajo en distinta unidad o localidad, previa solicitud basada en motivos de salud o rehabilitación del funcionario, su cónyuge o los hijos a su cargo, con previo informe del servicio médico oficial legalmente establecido y condicionado a que existan puestos vacantes con asignación presupuestaria cuyo nivel de complemento de destino y específico no sea superior al del puesto de origen, y se reúnan los requisitos para su desempeño. Dicha adscripción tendrá carácter definitivo cuando el funcionario ocupara con tal carácter su puesto de origen”. Esta previsión aparece reiterada por el artículo 66 bis del Reglamento General de Ingreso de Personal de la Administración, Provisión de Puestos y Promoción, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, conforme al cual:

*“Prevía solicitud basada en motivos de salud o rehabilitación del funcionario, su cónyuge, o los hijos a su cargo, se podrá adscribir a los funcionarios a puestos de trabajo de distinta unidad administrativa, en la misma o en otra localidad. En todo caso, se requerirá el informe previo del servicio médico oficial legalmente establecido. Si los motivos de salud o de rehabilitación concurren directamente en el funcionario solicitante, será preceptivo el informe del Servicio de prevención de*



*riesgos laborales del departamento u organismo donde preste sus servicios.*

*La adscripción estará condicionada a que exista puesto vacante, dotado presupuestariamente, cuyo nivel de complemento de destino y específico no sea superior al del puesto de origen, y que sea de necesaria provisión. El funcionario deberá cumplir los requisitos previstos en la relación de puestos de trabajo.*

*La adscripción tendrá carácter definitivo cuando el funcionario ocupara con tal carácter su puesto de origen y, en este supuesto, deberá permanecer un mínimo de dos años en el nuevo puesto, salvo en los supuestos previstos en el artículo 41.2 de este Reglamento.*

*El cese en el puesto de origen y la toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo deberán producirse en el plazo de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia.*

*Serán competentes para resolver los órganos contemplados en el artículo 64.3 de este Reglamento.”*

De lo establecido en los preceptos que acaban de reproducirse se desprende que será necesaria la concurrencia de una serie de requisitos para que quepa la efectiva adscripción que la norma establece: así, por una parte, será necesaria la existencia del grado de parentesco establecido por la norma entre el funcionario y la persona respecto de la que proceda el cuidado o rehabilitación y, por otra, que esta circunstancia haya sido debidamente acreditada por el servicio médico oficial legalmente establecido, a través de la emisión del correspondiente informe.

De este modo, para que pueda resultar de aplicación la previsión legal a la que se viene haciendo referencia será necesaria la comunicación al órgano competente para resolver de la adscripción de la información relativa a la salud o rehabilitación de la persona vinculada al funcionario que solicite dicha adscripción, lo que legitimará la cesión de los datos relacionados con la salud al amparo del artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999 en conexión con el artículo 20.1 h) de la Ley 30/1984, en su redacción actual.

Hecha la anterior consideración, debe nuevamente tenerse en cuenta que será de aplicación al caso objeto de análisis en el presente momento el principio de proporcionalidad en el tratamiento de los datos de carácter personal al que ya se ha hecho referencia, de forma que el órgano competente para la resolución de la solicitud de adscripción deberá únicamente acceder a la información que resulte imprescindible para poder apreciar la concurrencia de los requisitos para su otorgamiento que, en el supuesto analizado, deberá ser previamente constatada por el “servicio médico oficial legalmente

establecido”.

Ello implica que la única información a la que debería acceder el órgano competente en materia de personal para resolver sobre la adscripción prevista en la norma sería la que permita acreditar que se da efectivamente una situación relacionada con la salud o rehabilitación del cónyuge o hijos a cargo del solicitante que implica la necesidad de que se produzca el traslado al que se refiere la consulta, sin que dicha información haya de referirse expresamente a la concreta especificación de la enfermedad padecida, sino simplemente al cumplimiento de los requisitos previstos en la norma, toda vez que la valoración que ha de llevarse a cabo acerca de la concurrencia del requisito que viene analizándose en cada caso concreto competirá al servicio médico oficial legalmente establecido”, que en ningún caso parece coincidir, como se desprende de la documentación adjunta a la consulta, con el Jefe de la Dependencia o con el órgano de personal que debe resolver, en definitiva, sobre la procedencia de la adscripción.